



**SENTENCIA**

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	María Isabel Arias Restrepo
<b>DEMANDADOS</b>	Colpensiones Empresas Públicas de Medellín EPM ESP
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-016-2019-00108
<b>TEMA</b>	Pensión de sobrevivientes
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 210** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MARÍA ISABEL ARIAS RESTREPO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** y **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.P.M. E.S.P.**, con radicado 05-001-31-05-016-2019-00108.

• **PRETENSIONES:**

Aspira la demandante se declare que su cónyuge Luis Alfonso Bolaños Bedoya dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento en el decreto 758 de 1990. Como consecuencia, se condene a la demandada al pago de la pensión de sobrevivientes desde el 13 de febrero de 1990, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

• **HECHOS**

La demandante sustentó las anteriores pretensiones en los hechos siguientes: que contrajo matrimonio con Luis Alfonso Bolaños Bedoya el 24 de marzo de 1973, con quien procreó dos hijas. Que convivían bajo el mismo techo y

compartían lecho y mesa. Que dependía económicamente del causante, quien falleció el 13 de febrero de 1990. Afirma que en múltiples ocasiones se presentó ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, pero que allí le solicitaban una serie de documentos y que luego la entidad se negaba a recibirlos. Que a través de derechos de petición, tutelas y demás, logró recoger todos los certificados laborales y bonos pensionales de su fallecido cónyuge. Que antes de la muerte de su cónyuge, este se desempeñó en el sector público y privado, relacionando los siguientes períodos: Policía Nacional del 15/07/1971 al 13/08/1973, equivalente a 748 días; Coca-Cola Femsa del 06/03/1975 al 01/12/1976, equivalente a 625 días; Smurifit Kappa Carton de Colombia del 21/11/1977 al 20/03/1978, equivalente a 119 días; Postobon del 20/03/1979 al 11/10/1979, equivalente a 201 días; Sofasa del 3/12/1979 al 31/01/1980, equivalente a 57 días; EADE EEPP DE MEDELLÍN del 21/07/1983 al 21/11/1986, equivalente a 1200 días, lo que totaliza 2950 días o 421,4 semanas. Asimismo, que los períodos reconstruidos por Colpensiones según resolución GNR 363578 del 18 de noviembre de 2015, son: Socovig S.A. del 02/08/1974 al 04/01/1975, equivalente a 156 días; Cartón de Colombia del 08/05/1978 al 14/07/1978, equivalente a 68 días; Ingenieros Mecanicaso Asocia del 11/09/1978 al 08/10/1978, equivalente a 28 días; Servicios Indust de Colombia del 10/10/1978 al 06/02/1979, equivalente a 120 días; Siderúrgica de Medellín S.A. del 15/04/1980 al 10/06/1980, equivalente a 57 días, que totaliza 429 días o 61 semanas. Que el afiliado fallecido contaba con un total de 3379 días, lo cual equivale a 482.7 semanas, en toda su vida laboral. Indica que desde el año 2006 le cerraron las puertas para acceder al derecho de la pensión de sobreviviente, pues la entidad argumentaba no contar con la historia laboral del afiliado y que era la solicitante quien debía reconstruirla. Asimismo, que recibió diversas llamadas de la entidad, en la cual se le indagaban las razones por las cuales no había reclamado desde 1990 si contaba con el derecho, igualmente, fue visitada en el domicilio en medio de la investigación administrativa. Que a través de resolución GNR 363578 del 18 de noviembre de 2015, Colpensiones le negó el derecho pensional. Que recibió por parte de Colpensiones una carta 16 de diciembre de 2015 en la que se acepta el tiempo laborado, certificado por los bonos pensionales. Que el afiliado siempre devengó más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- **CONTESTACIONES:**

**Colpensiones:** Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al señalar que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de la pensión de sobrevivientes, improcedencia intereses moratorios, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, excepción innominada, descuento del retroactivo por salud.

**Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:** también se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al advertir que el señor Bolaños Bedoya no causó el derecho a la pensión. Como excepciones de mérito propuso: inexistencia de la obligación, normativa aplicable para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes, inaplicabilidad del decreto 758 de 1990 al sector público, falta de legitimación en la causa por pasiva de EPM, improcedencia de intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, prescripción y las que en el discurrir del proceso se prueben.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 15 de septiembre de 2020 el Juzgado Decimosexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a las demandadas de la totalidad de las pretensiones. Condenó en costas procesales a la demandante.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: que no está de acuerdo con la decisión de instancia, pues atendiendo a la fecha del fallecimiento del afiliado, esto es, 13 de febrero de 1990, se encontraba vigente el Decreto 232 de 1984, que modificó el Decreto 3041 de 1966. Por principio de igualdad, favorabilidad, seguridad jurídica, en principio sería aplicable las previsiones contenidas para los trabajadores oficiales desprendibles de las leyes 33 de 1985 y 12/1975, no obstante, por haber tenido vinculación con el Instituto de Seguros Sociales en vigencia del Decreto 232 de 1984 es también destinatario de dicha norma. Y por tal razón, al satisfacer más de 300 semanas en cualquiera época, satisfizo tal exigencia para que sus beneficiarios accedan a la prestación. Para el momento de la muerte pertenecía al régimen del sector

oficial, ley 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969, ley 33 de 1973, ley 12 de 1975 y ley 33 de 1985; no obstante, no contaba con 20 años de servicios. Que por favorabilidad, justicia y equidad le era aplicable el decreto 232 de 1984, el cual exige solo exige 300 semanas con antelación al 27 de diciembre de 1985 o 150 semanas en los 6 años anteriores al deceso. Que para el caso concreto se puede tener en cuenta el tiempo servido y no cotizado a cajas o entidades de previsión social, por existir una concurrencia de dos o más interpretaciones, una duda seria y objetiva sobre que no se exige que la densidad de semanas sea exclusivamente cotizada al ISS. Hizo énfasis en varias sentencias de las altas cortes relacionadas con la sumatoria de tiempos públicos y privados y en especial a la providencia SL1947-2020. Que de conformidad con la prueba obrante en el expediente se encuentra acreditada su calidad de beneficiaria de la prestación. Concluyó que Empresas Públicas de Medellín sería la obligada a responder por el pago de la pensión de conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de 1995 o en su defecto debe ser Colpensiones, entidad donde debieron efectuarse las cotizaciones. Solicita como consecuencia la revocatoria de la sentencia y que en su lugar se conceda la prestación económica de sobrevivientes.

- **ALEGATOS:**

Fueron presentado por las partes, así:

**Colpensiones:** Solicita la confirmación de la sentencia.

**Empresas Públicas de Medellín ESP:** Solicita la confirmación de la sentencia absolutoria. Advierte que dicha entidad no tiene obligación legal de reconocer y pagar la pensión de sobreviviente reclamada por la demandante, pues su cónyuge no causó el derecho. Que la sumatoria de tiempos públicos y privados está supeditado a que el derecho se reconozca bajo la condición de que la persona le sean aplicadas las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y ser beneficiario del régimen de transición.

## **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Atendiendo a la apelación formulada por la demandante, el problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si a ella le asiste derecho o no a percibir la pensión de sobrevivientes con ocasión de

la muerte de su cónyuge, bajo los postulados del decreto 232 de 1984 sumando tiempos públicos y privados.

Según el registro civil de defunción de folios 17, el señor Luis Alfonso Bolaños Bedoya falleció el 14 de febrero de 1990.

El afiliado a lo largo de su vida laboró al servicio de varias entidades, entre públicas y privadas, siendo la última de ellas la entidad pública EADE EEPP DE MEDELLÍN.

Si bien la misma demandante acepta que su cónyuge no acreditó la densidad de semanas exigidas para el sector público, toda vez que la ley 33 de 1985 exige 20 años de servicios y solo acreditó poco más de 9 años, solicita que la pensión se reconozca bajo los postulados del decreto 758 de 1990, aunque en el recurso de apelación señala que debe ser bajo el decreto 232 de 1984.

Atendiendo a que el afiliado no dejó causado el derecho a la pensión bajo la ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta su fecha de fallecimiento, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en el acuerdo 224 de 1966 aprobado mediante decreto 3041 del mismo año, modificado por el acuerdo 019 de 1983 aprobado por el decreto 232 de 1984; dicha normatividad refiere las exigencias para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, esto es, acreditar 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica al indicar que la sumatoria de tiempo público servido al Estado, sin aportes, con las cotizaciones pagadas al Instituto de Seguros Sociales con el fin de completar las semanas requeridas para la causación de la pensión de sobrevivientes solo es permitido bajo los postulados de la condición más beneficiosa en vigencia de la ley 100 de 1993, pues fue esta última norma la que permitió tal computo de períodos. Así se pronunció tal corporación en un caso similar al presente, resuelto con fundamento en el decreto 232 de 1984. Sentencia SL5291-2021:

*“El criterio reiterado de la Sala frente a la posibilidad de computar el tiempo público servido al Estado, sin aportes, con las cotizaciones pagadas al Instituto de Seguros Sociales con el fin de completar las semanas requeridas para la causación de las pensiones es viable cuando se trate de afiliados que se encuentren cobijados por el régimen de transición (CSJ SL3801-2021) o, en materia de pensión de sobrevivientes, cuando se trate de la aplicación de la condición más beneficiosa (CSJ SL5147-2020).*

*Hace énfasis la Corporación en que la nueva línea jurisprudencial se evidencia entre otras decisiones judiciales en: CSJ SL2590-2020; CSJ SL2659-2020; CSJ SL2557-2020; CSJ SL3110-2020; CSJ SL3838-2020; CSJ SL3657-2020; CSJ SL4480-2020, precedentes en los cuales si bien se da aplicación a principios como la universalidad y se pretende dar validez y homogeneizar todos los tiempos laborales de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y en el párrafo de su artículo 33, se reitera esto solo resulta aplicable para las pensiones que son reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y si bien los precedentes ya citados son aplicados en la contabilización de semanas previstas en el Acuerdo 049 de 1990, dicha prerrogativa se da en virtud del mismo Sistema de Seguridad Social en cuanto permite la aplicación de la ley derogada gracias al régimen de transición o la aplicación del principio de condición más beneficiosa, excepciones que dan lugar a la aplicación del nuevo criterio de la Corte en materia de sumatoria de aportes.*

*Para mayor claridad, en el caso de la pensión de sobrevivientes en la sentencia CSJ SL5147-2020, se precisó que, para las pensiones de invalidez y sobrevivientes dicha regla se aplica así:*

*[...] la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 [procede] cuando se invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.*

*Siguiendo lo expuesto, en el caso objeto de resolución por la Sala como quiera que la contingencia de la muerte ocurrió en el año de 1987, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que la pensión de sobrevivientes que se pretende le es aplicable el Acuerdo 244 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, sin que dicha normativa se derive de régimen de transición alguno o la aplicación del principio de condición más beneficiosa, resulta evidente que no es posible sumar los aportes cotizados al Ejército Nacional, razón por la cual los cargos no prosperan.”*

Conforme a la jurisprudencia relacionada, la cual comparte esta Sala del Tribunal, en el sentido que no es permitido la sumatoria de tiempo público servido al Estado, sin aportes, con las cotizaciones pagadas al Instituto de Seguros Sociales con el fin de completar las semanas requeridas para la causación de la pensión de sobrevivientes bajo los postulados del decreto 232 de 1984, pues dicha norma no contempló la posibilidad de computar estos períodos. Bajo este entendido, es necesario que el señor Bolaños Bedoya en vida hubiere acreditado 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época, sin que para ello puedan contabilizarse los períodos públicos sin cotización.

Nótese que los apartes leídos en la sustentación del recurso de apelación por el mandatario judicial de la accionante relacionados a la sentencia SL1947-2020, hacen alusión a un caso que se dio el computo bajo el principio de la condición más beneficiosa, diferente al presente asunto.

Visto lo anterior, pasa esta Sala del Tribunal a verificar si el señor Bolaños Bedoya acreditó la densidad de semanas que exige el decreto 232 de 1984. La historia laboral de folios 188 a 192 da cuenta que el afiliado cotizó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, un total de 206,86 semanas. En dicho conteo no se tuvieron en cuenta los períodos públicos sin cotización.

Razón social	Desde	Hasta	Días
Socovig S.A.	02-ago-74	04-ene-75	156
industrial de Gaseosas S.A.	06-mar-75	01-dic-76	637
Cartón de Colombia	21-nov-77	20-mar-78	120
Cartón de Colombia	08-may-78	14-jul-78	68
Ingenieros Mecánicos Asocia	11-sep-78	08-oct-78	28
Servicios Indust de Colombia	10-oct-78	06-feb-79	120
Postobón	16-mar-79	11-oct-79	210
Sofasa	11-dic-79	31-ene-80	52
siderúrgica de Medellín S.A.	15-abr-80	10-jun-80	57
Total días			1448
Total semanas			206.86

Así pues, el afiliado, en aplicación del decreto 232 de 1984, solo dejó acreditadas 206,86 semanas en toda su vida laboral, ninguna de ellas se dio dentro de los 6 años inmediatamente anteriores a su muerte, no cumpliendo como consecuencia el requisito de las 150 semanas en los seis (6) años inmediatamente anteriores a la muerte, o 300 semanas en cualquier tiempo que exige la norma. Lo que permite concluir que no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes.

En virtud de lo anterior, se torna innecesario el estudio de la calidad de beneficiaria de la demandante.

Corolario de todo lo dicho, al no haber causado el señor Bolaños Bedoya el derecho a la pensión de sobrevivientes, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por la demandante, son de su cargo y en favor Colpensiones y Empresas Públicas de Medellín ESP. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$500.000, los cuales se pagarán en cuantía de \$250.000 en favor de cada una.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

Se **CONFIRMA** la sentencia absolutoria que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia mencionada.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**





**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	María Isabel Arias Restrepo
<b>DEMANDADOS</b>	Colpensiones Empresas Públicas de Medellín ESP
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05- <b>016-2019-00108</b>
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia
<b>MAGISTRADO PONENTE</b>	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**  
Fijado el 19 de agosto de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**  
Se desfija el 19 de agosto de 2022 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO